

Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

Proveyendo a los escritos folios 337829, 338938 y 512025: téngase presente.

Vistos:

Ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se sustanció esta causa RIT O-5488-2018, caratulada “Lefever con Banco de Crédito e Inversiones”, sobre reconocimiento de relación laboral, despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones.

Por sentencia definitiva de veintidós de febrero del año dos mil diecinueve, la juez de la instancia, en lo pertinente, acogió las pretensiones de la demanda respecto a la demandada principal, Diseño y Desarrollo Computacionales Limitada, rechazándola respecto de la demandada solidaria, Banco de Crédito e Inversiones.

Contra este fallo, el demandante dedujo recurso de nulidad solicitando se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja la demanda en cuanto al régimen de subcontratación alegado.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de las partes.

Considerando:

Primero: Que el demandante invoca en su recurso, como única causal aquella prevista en la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por infracción de ley, en relación al artículo 183-A del mismo texto legal y los artículos 20 y 23 del Código Civil, toda vez que la sentencia reconoció que los servicios se prestaron por la demandada principal, Dydecom, con sus trabajadores y por su cuenta y riesgo, para el Banco BCI en virtud de un acuerdo contractual, en forma permanente, pues hace referencia al contrato de prestación de servicios entre ambas empresas a contar del año 2007 y por el demandante entre el período demandado, pero rechazó la demanda en cuanto a la subcontratación, porque el actor no prestó sus servicios en dependencias del Banco, requisito locativo que no exige la norma para configurar el régimen de subcontratación alegado.



Segundo: Que la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en el extremo que interesa, persigue verificar que la ley haya sido entendida, interpretada y aplicada correctamente al caso concreto, esto es, a los hechos que se han tenido por probados, tal como se han dado por establecidos en la sentencia. Por ende, la impugnación y la subsecuente revisión por parte de este tribunal han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar otros y, en particular, sin que pueda prescindirse tampoco de los que fueran determinados en el fallo.

Tercero: Que son hechos de la causa en relación a la causal invocada los siguientes:

- a) Que los servicios prestados por el demandante a contar de mayo de 2016 fueron similares sino idénticos a los prestados hasta diciembre de 2015, esto es, soporte técnico a plataformas del banco BCI, ya sea por proyectos o programas de migración de plataformas o administración de las mismas.
- b) Que el actor , tenía a su cargo la parte administración soporte de la empresa y ejecutaba los proyectos o programas que la empresa desarrollaba para el banco BCI, prestando soporte aplicativo, de mantención y desarrollo de determinados programas computacionales
- c) Que existió un relación comercial entre la empresa DYDECOM y el banco BCI, prestando la primera servicio de soporte tecnológico, relacionado con programas computacionales.

Cuarto: Que la subcontratación puede ser entendida como “la operación mediante la cual una empresa (empresa principal) encarga a un tercero (empresa contratista-subcontratista, auxiliar o trabajador autónomo) una parte de la producción o de servicios, para que sean incorporados al producto final ” (1 Monereo Pérez José Luis y Carolina Serrano Falcón.” La subcontratación empresarial. Hacia un nuevo modelo regulativo”. Madrid, Fundación Alternativas, 2010, p. 8. Disponible en:

<http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-> de-



trabajo/la-ubcontratacion-empresarial-hacia-un-nuevo-modelo-de-contratacion (consulta: agosto 2019).

Los mismos autores señalan “La subcontratación empresarial es una modalidad específica de la descentralización productiva, entendida esta última como el proceso productivo para la obtención de bienes y servicios basado en una técnica de gestión que consiste en contratar con proveedores exteriores –que pueden ser otras empresas o personas individuales– ciertas fases o actividades de la empresa, con independencia de que ésta viniera o no desempeñándolas con anterioridad”.

Quinto: Que hay que determinar si el elemento locativo es un requisito de concurrencia necesario del supuesto de hecho para que entre en juego el artículo 183 a) del Código del Trabajo, es decir, si la contrata se realiza en la esfera territorial donde tiene autoridad el empresario principal, para que éste asuma las responsabilidades previstas en el referido artículo, tal como lo sostiene el fallo recurrido.

Sexto: Que cabe recurrir a la historia fidedigna del establecimiento de la ley N°20.123, norma de interpretación legal prevista en el artículo 19, inciso 2°, del Código Civil, permite sostener que carece de incidencia para los señalados efectos, el lugar en que deban desempeñarse los trabajadores del contratista.

Es así, como en el Boletín N°2.493-13, de 16.05.06, que contiene el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, se transcribe la intervención del Sr. Ministro del Trabajo y Previsión Social, la que, en lo que interesa, señala:

“3-2 Respecto a la amplitud del concepto de subcontratación.

“c) En tercer término, se ha cuestionado el trabajo en régimen de subcontratación aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, en tanto presentaría problemas en su aplicación práctica derivado de la afirmación normativa en el sentido de que las labores respectivas deberían desarrollarse en las instalaciones físicas de la empresa mandante o dueña de la obra, en circunstancias que existen situaciones



en que las labores desarrolladas por el trabajador subcontratado no se ejecutan en instalaciones físicas del mandante.

“Tal afirmación no es exacta, pues ella supone una interpretación restrictiva que no encuentra fundamento en el texto legal aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, ni tampoco en las decisiones de la jurisprudencia legal o administrativa sobre la materia.

En efecto, no existe fundamento legal ni jurisprudencial para circunscribir la empresa o la faena a un ámbito espacial o físico determinado. Lo anterior resulta evidente de aplicar el concepto legal de empresa, ya sea aquel considerado en el artículo 3° del Código del Trabajo o aquél incorporado, específicamente a propósito del trabajo en régimen de subcontratación, en el texto legal aprobado por la Honorable Cámara de Diputados. En aplicación de ambos conceptos resulta plenamente posible que las labores desarrolladas por un trabajador en régimen de subcontratación se ejecuten en instalaciones ajenas al dueño de la obra o faena o empresa mandante, no obstante lo cual tales actividades laborativas deben ser consideradas como desarrolladas en régimen de subcontratación para este último, en tanto se trata de actividades que pertenecen a su organización y que se encuentran sometidas a su dirección”.

Séptimo: Que el artículo 3° del Código del Trabajo, define la empresa en los siguientes términos “empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada” Así entendida la empresa, es una organización de medios, donde el factor físico, geográfico o locativo no es lo esencial.

Que el artículo 183 a) del Código del Trabajo regula el trabajo en régimen de subcontratación y que surge cuando dos empresas independientes entre sí se relacionan con el cometido que una le da a la otra y que consiste en la producción de bienes o la prestación de servicios, que la otra se compromete a realizar por sí misma y con sus recursos humanos, financieros y materiales, tal como aconteció en la



especie, toda vez que el demandante prestaba servicio para el Banco BCI, a través de la demandada principal.

En ese sentido, conforme los hechos asentados el actor prestó soporte técnico a las plataformas del Banco BCI, ya en las dependencias del banco o desde las oficina de la demandada principal, vía remota e incluso desde el domicilio del demandante; lo relevante más que el espacio físico desde donde éstas se prestaron, es que estos servicios eran controladas por el Banco BCI. Si se tiene presente el tipo de funciones que el actor desarrollaba para el banco BCI, esto es, realizar programas computacionales, prestando además soporte aplicativo, mantención y desarrollo de éstos; labores en las que no resulta relevante el espacio físico desde el cual se presten, ya que las mismas, no requieren su presencia física y pueden ser prestadas a distancia.

Octavo: Que visto lo razonado, esta Corte estima que la sentenciadora ha incurrido en un error de derecho al desechar la existencia del régimen de subcontratación entre la demandante y el banco BCI.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de nulidad debiendo dictarse sin nueva vista sentencia de reemplazo, deducido por la parte demandante en contra de la sentencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la que se anula y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el ministro (s) señor Guillermo Rodríguez.

No firma el ministro (s) señor Rodríguez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte

N° 779-2019

N° Laboral - Cobranza-779-2019.



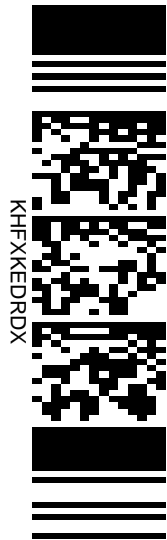
LILIAN ATENAS LEYTON VARELA
MINISTRO
Fecha: 26/11/2019 12:13:38

RAUL GREGORIO TRINCADO
DREYSE
FISCAL
Fecha: 26/11/2019 11:02:15



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Fiscal Judicial Raul Gregorio Trincado D. Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTO:

De la sentencia anulada se mantienen sus consideraciones y citas legales, previa eliminación del motivo 13° párrafo quinto; de la parte resolutive en su punto III reemplazándose en cuanto a que se condena solidariamente al Banco de Crédito de Inversiones.

Y teniendo, además presente:

1.- Las consideraciones expuestas en los motivos 3° a 7° del fallo de nulidad que precede, a los que cabe remitirse para evitar repeticiones innecesarias.

2.- Que el artículo 183 A) del Código del Trabajo, prescribe en su inciso 1° que “es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica”.

3.- Que, conforme a lo razonado en el fallo de nulidad, se entenderá como empresa mandante al Banco de Crédito e Inversiones y en consecuencia se dará por concurrente en la especie la situación que se consigna en el artículo 183-A inciso primero en su primera parte, de donde resulta entonces que de acuerdo artículo 183-B la empresa principal resulta responsable de las obligaciones de dar que afecta a la demandada principal respecto de sus obligaciones para con el actor, incluidas las eventuales indemnizaciones legales correspondientes por término de la relación laboral.



4°.- Que, determinado que sea la responsabilidad de la demandada solidaria corresponde precisar la naturaleza de tal responsabilidad y su extensión. Respecto del primer punto cabe señalar que Banco de Crédito e Inversiones no acompañó prueba alguna para probar en forma suficiente que fueron ejercitados los derechos de control respecto del demandado, de lo que deviene que la responsabilidad es solidaria.

En relación a la extensión de esa responsabilidad solidaria, conforme al Código del Trabajo y al Reglamento dictado para complementar la Ley N° 20.123, las obligaciones de dar de carácter laboral y previsional quedan circunscritas al pago de:

- 1) remuneraciones
- 2) asignaciones en dinero
- 3) cotizaciones previsionales
- 4) las indemnizaciones legales por término del contrato de trabajo.

En ese orden de ideas, se accederá a la demanda solidaria deducida en contra de esta demandada respecto de todas las prestaciones otorgadas por el fallo recurrido y de las que debe responder la demandada principal, dado que ellas se encuadran dentro de los conceptos precisados anteriormente incluida la nulidad el despido, por el hecho de no haber obrado con diligencia y cautelado el pago de las cotizaciones pertinentes como lo permiten los derechos de control e información consagrados en el artículo 183 C del Código del Trabajo. La extensión de la responsabilidad se graduara desde el punto de vista temporal desde el inicio de ejecución del contrato de trabajo y hasta el despido.

Los montos de las prestaciones e indemnizaciones quedaron fijados al acogerse la demanda contra la demandada principal.

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en los artículos 1,3,7,159, 161,162,163,172, 183, 420,446,453,454 y 459, todos del Código del Trabajo, artículo 13 de la Ley 19.728, se declara que:

I.- Que SE HACE LUGAR a la demanda interpuesta por don Felipe Alejandro Rubí Araya y don Jaime Ignacio Rubí Araya, en



representación de don EDUARDO ANDRÉS LEFEVER ARAYA, en contra de DISEÑO Y DESARROLLO COMPUTACIONALES LTDA. (DYDECOM), representada legalmente por don Luis María Abadie Etguezábal en cuanto se declara:

a.- Que entre dichas partes existió relación laboral en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo, del 31 de mayo de 2016 al 27 de julio de 2018.

b.- Que dicha relación laboral concluyó por despido indirecto justificado, acaecido el 27 de julio de 2018, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, al haber incurrido la demandada individualizada en la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, contenida en el artículo 160 N° 7 del citado cuerpo legal, y además procede la sanción del inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, y se condena, en consecuencia a dicha demandada a pagar al demandante lo siguiente:

1.- Remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, contado desde la fecha de separación de los servicios, esto es, 27 de julio de 2018, y hasta la fecha del pago efectivo de las cotizaciones previsionales adeudadas, considerando una remuneración mensual de \$3.112.393;

2.- \$3.112.393, por indemnización sustitutiva del aviso previo;

3.- \$6.224.786, por indemnización por años de servicios;

4.- \$3.112.393, por recargo del 50% de indemnización anterior.

5.- \$28.551.250, por saldo adeudado de remuneraciones del período trabajado.

6.- \$4.357.350, por feriado legal del período trabajado.

7.- \$378.374, por feriado proporcional.

8.- Cotizaciones previsionales adeudadas en AFP HABITAT, ISAPRE CONSALUD y AFC, del período laborado (31 de mayo de 2016 a 27 de julio de 2018), y oficiándose en los términos referidos en el motivo duodécimo de esta sentencia.



II.- Que las sumas que se ordena pagar, deben serlo con los reajustes e intereses establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Que se condena solidariamente al Banco de Crédito e Inversiones, respecto de todas las prestaciones a que fue condenada la demandada principal.

IV.- Que cada parte se hará cargo de sus costas.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el ministro (s) señor Guillermo Rodríguez.

No firma el ministro (s) señor Rodríguez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte

N° 779-2019

LILIAN ATENAS LEYTON VARELA
MINISTRO
Fecha: 26/11/2019 12:13:46

RAUL GREGORIO TRINCADO
DREYSE
FISCAL
Fecha: 26/11/2019 11:02:17



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Fiscal Judicial Raul Gregorio Trincado D. Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

